



PRECIOS DE SUSCRICION.

Table with subscription rates for different provinces and regions. Includes rows for 'PROVINCIAS ISLAS BALEARES Y CANARIAS', 'ULTRAMAR', and 'EXTRANJERO' with rates for monthly, quarterly, and annual periods.

SE SUSCRIBE. En Madrid en el Despacho de la IMPRENTA NACIONAL. PRECIOS DE SUSCRICION. MADRID. Por un mes... 42 rs. Por tres meses... 36.

GACETA DE MADRID.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real familia continúan en esta corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE ESTADO.

Cancilleria.

Ayer á las dos de la tarde S. M. la REINA nuestra Señora se dignó recibir en audiencia pública, con las formalidades acostumbradas, al Excelentísimo Sr. Vely-Eddin-Bajá, Embajador nombrado cerca de su Real Persona por S. M. el Emperador de los otomanos.

Acompañaban á S. M. la REINA el REY su augusto Esposo y los altos funcionarios que asisten á estas ceremonias, y al Sr. Vely-Eddin el personal de la Embajada.

Recibido por los funcionarios de Palacio designados al efecto, y previamente anunciado por el señor Introdutor de Embajadores, el Embajador otomano pronunció al entregar á S. M. la carta credencial el siguiente discurso:

«SEÑORA: Al acreditarme cerca de V. M. en calidad de Embajador extraordinario, mi augusto Soberano ha tenido por principal objeto la conservación y el fomento de las relaciones de amistad y de buena inteligencia que tan felizmente existen entre ámbos Gobiernos y ámbos países.

S. M. Imperial el Sultan, al subir al Trono de sus antepasados, confía en que V. M. querrá continuar los sentimientos amistosos que manifestó á su augusto Hermano.

Me considero dichoso expresando á V. M. la formal seguridad de los sentimientos de afecto y de estimación muy particular que mi Soberano profesa á la Persona de V. M., y de los muy sinceros votos que forma por su ventura, la de su augusto Esposo, la del Príncipe de Asturias y la de la Real familia, así como por la prosperidad de la gran nación cuyo destino ha confiado el Todopoderoso á Vuestra Real Majestad.

De inmensa honra para mí y de viva satisfacción es, Señera, el haber sido elegido por S. M. I. el Sultan con el fin de desempeñar cerca de V. M. esta alta misión, para cuyo cumplimiento me atrevo á solicitar anticipadamente vuestra bondad é indulgencia.»

Y S. M. tuvo á bien contestar:

«Señor Embajador: Tengo una verdadera satisfacción en oír la manifestación de los sentimientos de que se halla animado el Emperador vuestro Soberano. Son los mismos que yo he abrigado siempre de estrechar cada vez más la buena armonía que une á nuestros Gobiernos y Estados. Ningun medio encuentro más propio para conseguir este fin que el de cultivar con el Sultan la amistad que profesaba á su augusto Hermano, cuya muerte prematura me ha causado el mayor dolor.

Agradezco vivamente los votos que forma el Emperador por mi felicidad, por la del Rey mi augusto Esposo, por la del Príncipe de Asturias y toda mi familia, así como por la prosperidad de España, y pido á la Providencia que le conceda largo y glorioso reinado para que pueda hacer la ventura de sus pueblos.

Siéndome conocidas de antemano vuestras circunstancias y distinguidas cualidades, estoy persuadida de que desempeñareis con todo acierto la misión que os ha confiado nuestro Soberano, para lo cual hallareis en mí y en mi Gobierno las disposiciones más benévolas.»

Acto continuo el Sr. Embajador tuvo la honra de presentar á SS. MM. el personal que le acompañaba, y se retiró con el Sr. Introdutor de Embajadores en la misma forma y con los mismos honores que al dirigirse al Real Palacio.

MINISTERIO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR.

REALES DECRETOS.

De conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros,

Vengo en admitir la dimisión que el Teniente General D. José Lemery é Ibarrola ha hecho del cargo de Gobernador Capitan general de las Islas Filipinas; quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos.

Está rubricado de la REAL MANO.

EL MINISTRO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR, LEOPOLDO O'DONNELL.

En atención á las particulares circunstancias que concurren en el Teniente General D. Rafael Echague y Bermingham, Gobernador Capitan general de Puerto-Rico,

Vengo en nombrarle para el mismo cargo

en las Islas Filipinas, de conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos.

Está rubricado de la REAL MANO.

EL MINISTRO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR, LEOPOLDO O'DONNELL.

En atención á las particulares circunstancias que concurren en el Teniente General Don Félix de Messina é Iglesias, Marqués de la Serna, Director general del cuerpo de Estado Mayor,

Vengo en nombrarle Gobernador Capitan general de la isla de Puerto-Rico, de conformidad con lo propuesto por mi Consejo de Ministros.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos sesenta y dos.

Está rubricado de la REAL MANO.

EL MINISTRO DE LA GUERRA Y DE ULTRAMAR, LEOPOLDO O'DONNELL.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista la Real orden que V. E. se sirva comunicarme con fecha de hoy transcribiendo una parte telegráfica del Capitan general del departamento de Cádiz, en que manifiesta que el vapor Vigo, presentado por la empresa de la línea trasatlántica, ha tenido averías en los condensadores, y que, aun en el caso de reunir las condiciones del contrato, no podría hacer el viaje del día 10 del corriente mes, como también que los empresarios habían presentado para sustituir á aquel buque otro llamado Ciudad Cordal, cuyo reconocimiento estaba ya dispuesto:

Vista una exposicion presentada por D. Carlos Ezizaguirre, representante de la empresa referida, en que al participar la avería sufrida por el Vigo ofrece el otro buque, cuyo nombre queda expresado:

Considerando que, según V. E. manifiesta, no existe ningun vapor de guerra que pueda salir de Cádiz el día 10 conduciendo la correspondencia para las Antillas:

Considerando que la expedicion anunciada no puede dejar de verificarse sin gran perjuicio para el servicio público;

S. M. la REINA ha tenido á bien disponer que no se ponga impedimento al vapor Ciudad Cordal para que haga la expedicion próxima, si despues de tenidamente reconocido en el departamento de Cádiz no hubiere inconveniente á juicio de las Autoridades de Marina, aun cuando no reuna todas las condiciones del contrato, sin perjuicio de que cuando se recibian los datos oportunos se determine lo que corresponda respecto á la responsabilidad en que la empresa haya incurrido.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Febrero de 1862.

LEOPOLDO O'DONNELL.

Sr. Ministro de Marina.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.

En vista de lo que me ha expuesto el Ministro de la Gobernacion, de acuerdo con el Consejo de Ministros; oido el parecer del Consejo de Sanidad y del de Estado en pleno,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento, que modifica el de 15 de Junio de 1860, para la concesion de las pensiones establecidas en los artículos 74, 75 y 76 de la ley de Sanidad.

Dado en Palacio á veintidos de Enero de mil ochocientos sesenta y dos.

Está rubricado de la REAL MANO.

EL MINISTRO DE LA GOBERNACION, JOSÉ DE POSADA HERRERA.

REGLAMENTO.

PARA LA CONCESION DE LAS PENSIONES ESTABLECIDAS POR LOS ARTICULOS 74, 75 Y 76 DE LA LEY DE SANIDAD.

Artículo 1.º Todos los Profesores de Medicina, Cirujía y Farmacia que en tiempo de epidemia ó contagio se inutilicen para el ejercicio de su facultad á causa del extremo celo con que hayan desempeñado su profesion en beneficio del público tendrán derecho á disfrutar una pensión de 2.000 á 5.000 rs. anuales mientras permanezcan inutilizados.

Art. 2.º Disfrutarán de la pensión de 5.000 rs. en los términos que expresa el art. 74 de la ley de Sanidad cuantos Profesores se inutilicen y se hallen comprendidos en los casos siguientes:

Haber practicado su profesion por espacio de 10 años. Hallarse condecorado por servicios anteriores con la cruz de Beneficencia ó la de Epidemias.

Haber prestado los auxilios de la ciencia espontánea y gratuitamente ó por encargo de la Autoridad, pasando á sus propias expensas de un punto sano á otro en que exista el contagio.

Art. 3.º Podrán optar á la pensión de 4.000 reales anuales:

Los Profesores que, brindándose á prestar sus servicios gratuitamente en un pueblo epidemizado, se inutilicen á consecuencia de ellos.

Los que los hayan prestado por encargo de la Autoridad sin ninguna retribucion.

Art. 4.º Oportará á la pensión de 3.000 rs. los Facultativos que se inutilicen desempeñando las plazas de titulares, ó prestando sus servicios á invitacion ó por mandato de la Autoridad con la retribucion correspondiente.

Art. 5.º A los Profesores solteros comprendidos en el artículo anterior se les concederá la pensión de 2.000 rs. anuales.

Art. 6.º Las viudas é hijos habidos en legítimo matrimonio de los Profesores que fallecieron en el desempeño de sus funciones facultativas disfrutarán la pensión que á estos corresponda, al tenor de los artículos 2.º, 3.º y 4.º del presente reglamento.

Art. 7.º Despues del fallecimiento de la viuda pasará la pensión á los hijos, los cuales gozarán de ella, los varones hasta salir de la menor edad, y las hembras hasta que tomen estado.

Art. 8.º Para solicitar de las Cortes alguna de las pensiones á que se refieren los artículos anteriores deberá preceeder la formacion de un expediente á instancia de los interesados ante el Alcalde del pueblo donde hayan prestado los servicios que hubieren ocasionado su inutilizacion. Este expediente constará de los siguientes documentos:

1.º Certificacion de tres Facultativos, legalizada, en que se acredite que el aspirante á la pensión ó su causante se hallaba libre, antes de empezar la epidemia ó contagio á que se atribuya su inutilidad ó muerte, de todo padecimiento físico que haya podido ocasionarla, y que falleció ó quedó inútil á consecuencia de la enfermedad epidémica ó de otra contrada durante el azote; expresando en este último caso, hasta donde la ciencia lo permita, si la epidemia pudo influir ó no en el término del padecimiento.

2.º Los títulos y diplomas ó testimonios legalizados de ellos en que se acredite el grado del interesado en la profesion, condecoraciones, méritos y servicios extraordinarios que haya prestado en la facultad.

3.º Una informacion de 12 testigos, vecinos del pueblo, mitad pobres y mitad acomodados, en la que depongan cuanto sepan acerca de la conducta facultativa observada por el Profesor durante la existencia de la epidemia ó contagio hasta el momento en que quedó inutilizado, á cuya informacion acompañarán los informes del Procurador Sindico, Junta municipal de Sanidad y un atestado del Cura párroco.

Art. 9.º Reunidos en esta forma los citados documentos, el Alcalde los remitirá con su informe al Gobernador de la provincia, determinando con precision si el Profesor servia la plaza de Médico, Cirujano ó Farmacéutico en concepto de titular del pueblo, ó si su asistencia á los enfermos fué voluntaria ó por invitacion ó mandato de la Autoridad, con todo lo demás que considere conveniente para la mayor claridad de los hechos en que se funden los reclamos.

Art. 10.º El Gobernador, despues de oír el dictamen del Consejo y Junta de Sanidad provinciales, elevará con el suyo el expediente al Ministerio de la Gobernacion, informando, con referencia al que se instruyó en el oportuno caso á los antecedentes relativos al asunto, si en la poblacion de que se trata reinó la epidemia durante la cual se suponen prestados por el facultativo los servicios que se alegan.

Art. 11.º Completos ya y documentados en esta forma los expedientes, el Gobierno resolverá, oyendo previamente, si lo considera oportuno, al Consejo de Sanidad del Reino.

Art. 12.º Los expedientes que se instruyan para conceder pensiones á las viudas y huérfanos de los Profesores que fallecieron en el desempeño de sus funciones facultativas contendrán, además de los documentos indicados, las partidas legalizadas de defuncion del Profesor, la de su casamiento y la de bautismo de sus hijos.

Madrid 22 de Enero de 1862.—Aprobado por S. M.—Posada Herrera.

Subsecretaria.—Negociado 3.º

Remitido á informe de la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado el expediente de autorizacion negada por V. S. al Juez de primera instancia de San Roque para procesar á Don Francisco Rivas, Alcalde de Jimena, ha consultado lo siguiente:

«Excmo. Sr.: Esta Seccion ha examinado el expediente en que el Gobernador de la provincia de Cádiz ha negado al Juez de primera instancia de San Roque la autorizacion que ha solicitado para procesar á D. Francisco Rivas, Alcalde de Jimena.

Resultado: Que dos individuos del Ayuntamiento de dicho pueblo denunciaron al Juzgado varios daños que encontraron causados en los montes de propios, para cuya inspeccion y reconocimiento fueron comisionados los denunciantes por la corporacion municipal:

Que añadieron ser el autor de dichos daños el Alcalde D. Francisco Rivas, quien prevaleándose de su autoridad y de la circunstancia de ser dueño de una suerte ó porcion de monte lindante con el perteneciente al comun del pueblo, había alterado los linderos marcados en 1835 con acuerdo del Ayuntamiento; y cercenando terreno al monte confinante, lo había agregado á su finca, cortando en seguida hasta 522 árboles, cuya mayor parte radicaba en terreno del comun:

Que instruidas diligencias sumarias en averiguacion de los hechos denunciados, resultó ser cierta la corta de árboles, y haber sido hecha de orden del Alcalde; mas no se patentizó cumplidamente si los linderos habían sido fraudulentamente alterados, y si los árboles cortados pertenecian ó no al monte del comun ó al de la propiedad del Alcalde:

Que el Juzgado, de conformidad con el Promotor fiscal, pidió la autorizacion para proceder contra dicha Autoridad por el delito de hurto:

Que el Gobernador dió audiencia al interesado, quien se defendió alegando que la denuncia era calumniosa; que los árboles cortados pertenecian á las tierras de su propiedad, y que los que le han calumniado son los que han alterado los linderos para poder fundar en algo su denuncia:

Que en vista de esta manifestacion el Gobernador, conforme con el Consejo provincial, negó la autorizacion por ahora, en atención á resultar una cuestion previa sobre el deslinde de los montes de propios de Jimena, cuyo exámen y decision incumbe á la Administracion.

Considerando que la culpabilidad ó inculpabilidad del Alcalde de Jimena pende esencialmente del resultado del deslinde que haya de hacerse en los montes de propios de aquel pueblo, y mientras no se lleve á efecto esta diligencia previa no es posible calificar la conducta del Alcalde con referencia á un delito que hoy no aparece debidamente comprobado;

La Seccion opina que debe confirmarse por ahora la negativa del Gobernador.»

Y habiéndose dignado S. M. la REINA (Q. D. G.) resolver de conformidad con lo consultado por la referida Seccion, de Real orden lo comunico á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Enero de 1862.

POSADA HERRERA.

Sr. Gobernador de la provincia de Cádiz.

MINISTERIO DE FOMENTO.

Obras públicas.—Negociado 5.º

Ilmo. Sr.: Accediendo S. M. la REINA (Q. D. G.) á lo solicitado por D. Pedro María del Castillo, vecino de Madrid, ha tenido á bien autorizarle por el término de ocho meses para verificar los estudios de un ferrocarril que partiendo de Aranjuez y pasando por Ocaña termine en Tarancón; en la inteligencia de que por esta autorizacion no se confiere al peticionario derecho alguno á la concesion del camino, ni á indemnizacion de ningun género por los gastos que los referidos estudios le ocasionen; reservándose el Gobierno la facultad de conceder iguales autorizaciones á las que las soliciten, y elegir entre los proyectos que se presenten el que juzgue más conveniente á los intereses generales del pais, teniendo presentes al mismo tiempo los particulares creados por anteriores concesiones.

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Enero de 1862.

VEGA DE ARMIJO.

Sr. Director general de Obras públicas.

RECLAMACION.

En el número de ayer, en la segunda de las notas que constan al pie del Estado de las experiencias hechas á bordo del vapor Leopoldo I el 17 de Enero, se lee por error de copia que las máquinas habían funcionado con bastante irregularidad; debe leerse regularmente, como se desprende de las palabras que siguen:

En el informe del Coronel de Estado Mayor de artilleria de la Armada debe entenderse: veinte carabinas rayadas, donde dice veinte cureñas.

CONSEJO DE ESTADO.

REAL DECRETO.

Doña ISABEL II, por la gracia de Dios y la Constitucion de la Monarquía española REINA de las Españas. Al Gobernador y Consejo provincial de Murcia, y á cualesquiera otras Autoridades y personas á quienes tocare su observancia y cumplimiento, sabed: que he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que en el Consejo de Estado pende en grado de apelacion entre partes, de la una Don Joaquin Moreno, vecino de Cartagena, como Presidente de la sociedad minera Santa Cecilia, y en su nombre el Licenciado D. Carlos Masa Sanguinetti, apelante en rebeldía; y de la otra D. Pedro Rosique, Marqués de Camachos, que lo es de Murcia, en concepto de Presidente de la sociedad minera El Trueno, y en su representación el Licenciado D. Eugenio de Eguizábal, apelado, sobre revocacion de la sentencia dictada por el Consejo provincial de Murcia en 21 de Enero de 1861, por la que se revocó el decreto del Gobernador de 24 de Octubre de 1857 declarando la caducidad de la mina Venus.

Visto: Vistos los antecedentes, de los cuales resulta: Que denunciada esta mina como abandonada, el Gobernador de Murcia decretó su caducidad:

Que contra esta resolucion dedujo demanda en el Consejo de provincia el Marqués de Camachos, Presidente de la sociedad El Trueno, dueño de la mencionada mina; y continuada la instancia, en la que fué parte coadyuvante de la Administracion la sociedad minera Santa Cecilia, se dictó sentencia definitiva en los términos indicados:

Que apelada por el representante de esta sociedad, y desestimado el recurso, el Licenciado Masa Sanguinetti, á nombre de la misma, interpuso el de queja en el Consejo de Estado, rovocándose en su consecuencia el auto del Consejo provincial, y teniendo por admitida la apelacion, con remesa de los autos, previo emplazamiento:

Que tuvo este efecto en 27 de Julio; y como no compareciese el apelante á mejorar el recurso, mi Fiscal y el Marqués de Camachos, y en su nombre el Licenciado D. José Eugenio de Eguizábal, le acusaron la rebeldia en 4 de Octubre mediante haber trascurrido con exceso los dos meses que al efecto señala el reglamento, por lo que la Seccion de lo Contencioso en providencia de 8 del mismo mes la hubo por acusada:

Visto el art. 251 del reglamento de 30 de Diciembre de 1846, segun el cual, si el apelante no mejora el recurso en el término señalado, se declarará desierta la apelacion, y la sentencia consentida á la primera rebeldia que le acuse el apelado:

Considerando que en el actual estado de los autos no cabe otra resolucion que la prejuzgada en el citado artículo 251 de dicho reglamento:

Conformándose con lo consultado por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado en sesion á que asistieron D. Domingo Ruiz de la Vega, Presidente; D. Joaquin José Casaus, D. José Cavada, D. Manuel de Sierra y Moya, D. Francisco de Luxán, D. Serafin Estévez Calderon, D. Antonio Escudero, D. Manuel Garcia Gallardo y el Marqués de Girona,

Vengo en declarar desierta la apelacion de que se trata, y consentida la sentencia á que la misma se refiere; y en mandar se devuelvan los autos al Consejo provincial, de donde proceden.

Dado en Palacio á trece de Enero de mil ochocientos sesenta y dos.—Está rubricado de la Real mano.—El Presidente del Consejo de Ministros, Leopoldo O'Donnell.

Publicacion.—Leído y publicado el anterior Real decreto por mi el Secretario general del Consejo de Estado, hallándose celebrando audiencia pública la Sala de lo Contencioso, acordó que se tenga como resolucion final en la instancia y autos á que se refiere; que se una á los mismos; y se notifique en forma á las partes, y se inserte en la Gaceta. De que certifico. Madrid 16 de Enero de 1862.—Juan Sunyé.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

En la villa y corte de Madrid, á 27 de Enero de 1862, en el pleito pendiente ante Nos por recurso de casacion seguido en el Juzgado de primera instancia de Vales-Rubio en la Sala tercera de la Real Audiencia de Granada por Eladio Molina Jimenez, con Francisca Jimenez Ferrer y el Ministerio fiscal, sobre defensa por pobre:

Resultando que, entablada demanda por Francisca Jimenez Ferrer contra los hermanos Bartolomé y Eladio Molina, sobre division de una casa y propiedad de un palomar, solicitó el último, durante el término de prueba, que se le recibiera informacion de pobreza, en atencion á que, habiéndole vendido su hermano la parte de casa que la pertenecía, tenia que sostener por sí solo el pleito, y que no poseía más que la casa referida y unos olivos de corto valor, no bastando su trabajo personal para el sustento de su familia, por lo que tenia que vivir en compañía de su abuela política:

Resultando que Francisca Jimenez impugnó la solicitud de pobreza, ya porque las leyes prohibian la enajenacion de la cosa litigiosa, ya porque Eladio había heredado bienes de su suegro y se hallaba, además, dedicado al oficio de confitero, por el que debía satisfacer la cuota de 210 rs.

Resultando que, recibido el incidente á prueba, una y otra parte la articularon de testigos, dirigiéndose la de Eladio á justificar que la confiteria era de su suegro, y que los productos de la casa de su propiedad los tenia cedidos para pago de una deuda, habiéndose además certificado á su instancia por los Secretarios de Estadística y Ayuntamiento que en el año de 1859 pagó 43 rs. y 80 céntimos de contribucion territorial, no hallándose inscrito en la industria:

Resultando que, en 30 de Junio de 1860, la Sala tercera de la Audiencia de Granada, por sentencia confirmatoria con costas de la del Juez de primera instancia, denegó á Eladio Molina su solicitud, y que este interpuso recurso de casacion, citando como infringido el artículo 182 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Sebastian Gonzalez Zetina,

Considerando que el art. 182 de la ley de Enjuiciamiento ha de entenderse y aplicarse en union con el 184, con arreglo al cual, cuando se infiera, á juicio del Juez, por cualquiera signo exterior, que los comprendidos en los casos del primero de dichos artículos tienen medios superiores al jornal doble de un bracero en cada localidad, no se les otorgará la defensa por pobre:

Considerando que la Sala, al apreciar del modo que lo ha hecho, tanto la prueba de testigos presentada por las partes, como los demás datos deducidos del proceso, respecto á los medios del recurrente, usó de la facultad que el referido artículo 184 le concede, no habiendo, por consiguiente, infringido disposicion alguna legal:

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casacion interpuesto por Eladio Molina Jimenez, á quien condenamos en las costas y á la pérdida de la cantidad por que prescricion, que se distribuirá con arreglo á la ley; devolviéndose los autos á la Audiencia de Granada con la certificacion correspondiente.

Asi por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta é insertará en la Coleccion legislativa, pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Ramon Lopez Vazquez.—Sebastian Gonzalez Nandin.—Gabriel Ceruelo de Velasco.—Pedro Gomez de Hermosa.—Pablo Jimenez de Palacio.—Laureano Rojo de Norzagaray.—Ventura de Colza y Pando.

Publicacion.—Leído y publicado para la precedente sentencia por el Excmo. é Ilmo. Sr. D. Ramon Lopez Vazquez, Presidente de la Sala primera del Supremo Tribunal de Justicia, celebrando audiencia pública la misma Sala en el día de hoy, de que yo el Escribano de Cámara certifico. Madrid 27 de Enero de 1862.—Juan de Dios Rubio.

RECTIFICACION.

En la sentencia publicada en la Gaceta de ayer, décimo resultando, línea 43, donde dice: «pues se había convertido en la particula disyuntiva y,» debe decir: «pues se había convertido en y la particula disyuntiva o.»

TRIBUNAL DE CUENTAS DEL REINO.

SALA TERCERA.

En el expediente de la cuenta de Propios y Arbitrios por multas pertenecientes á la provincia de Córdoba, comprensiva desde 1.º de Mayo á fin de Diciembre de 1822, rendida por el Depositario de la Diputacion provincial D. Andrés Navajas y Cruz, siendo Ministro Ponente el Ilustrisimo Sr. D. Rafael de Navascués:

Visto que del exámen practicado á esta cuenta resultaron dos reparos por omision de cargo de 699 rs. 7 maravedís el primero, y el segundo por falta de justificacion de la existencia de 4.210 rs. 33 mrs., que quedó en su poder en fin de Diciembre de 1822:

Visto que formulado el pliego correspondiente en 23 de Junio de 1857, fué dirigido al Gobernador de la provincia para que lo contestase el cuentadante responsable, ó sus herederos caso de que hubiere fallecido aquel:

Visto que no pudo obtenerse contestacion alguna, por cuya razon fueron orlados por medio de la Gaceta y Boletín oficial en los meses de Agosto último en las dos audiencias prescritas por la ley, sin haberse presentado los responsables á deducir el derecho que pudiera convenirles:

Visto el dictamen fiscal:

Considerando que apurados ya los trámites legales ha quedado cerrada la discusion, conforme á lo que determina el art. 43 de la ley orgánica de 25 de Agosto de 1851, y los procedimientos anteriores corresponden al expediente ejecutivo de reintegro:

Fallamos que debemos declarar y declaramosPartida de alcancá 4.910 rs. 18 cént., contra D. Andrés Navajas y Cruz, Depositario que fué de la Diputacion provincial de Córdoba en 1822, condenándole, ó á sus herederos si hubiere aquel fallecido, al reintegro á los fondos provinciales de dicha cantidad, quedando en suspenso la aprobacion de esta cuenta.

Expidase certificacion que se pasará al Ministro letrado de esta Sala para los efectos prevenidos en el título 5.º de la ley orgánica; pugñiques en la Gaceta, y pase despues el expediente á la Seccion.

Así lo acordamos y firmamos en Madrid á 18 de Enero de 1862.—Manuel Sanchez Ocaña.—José de Adaro.—Rafael de Navascués.

Publicacion.—Leído y publicado fué el anterior fallo por el Ilmo. Sr. D. Rafael de Navascués, Ministro del Tribunal, estándose celebrando audiencia pública en su Sala tercera hoy día de la fecha, y acordó que se tenga como resolucion final, y que se notifique á las partes por cédula, de que certifico como Secretario de la misma. Madrid 1.º de Febrero de 1862.—Julian Saiz Milanés. 576





